

Editorial

¿Cómo se construye el país que queremos?

En el 2007, año 17 de FERMENTUM, el de la llegada al número 50, en este número, el 49, que antecede al que será motivo de una celebración de nuestro esfuerzo editorial, dedicaremos algunas líneas a considerar la evolución de la situación sociopolítica del país hasta el mes de julio de los corrientes.

Tal como indicamos en el editorial de nuestro No. 48, los resultados de las elecciones presidenciales de finales del 2006 auguraban una aparente consolidación y legitimación del Gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías después de su contundente éxito electoral. Sin embargo, esa posibilidad dependía de su capacidad para utilizar ese éxito para superar la extrema polarización que el país había sufrido, al menos desde el 2001. Sugeríamos aprovechar esta oportunidad para reconocer a la oposición que había surgido del proceso electoral mismo como reconciliada con las formas democráticas con el fin de facilitar, a su vez, el reconocimiento que ésta había hecho del Gobierno y de las instituciones del Estado venezolano.

Esa posibilidad lejos de considerarse, no sólo se desechó sino que, por el contrario, en una estrategia de radicalización y reforzamiento de las rupturas, el Gobierno no sólo no dio muestras de reconocimiento o reconciliación con la oposición misma, sino que golpeó con extraña saña a sus propios copartícipes. Muy temprano, y desde los primeros días del mes de enero, se han propuesto en forma agresiva y apurada propuestas de radicalización política vinculadas a la supuesta

consolidación del «socialismo del siglo XXI», bajo el equivocado supuesto que el resultado electoral puede ser interpretado como una especie de mandato mayoritario a favor de esa propuesta (si bien nadie ha explicado debidamente en que consiste el socialismo del siglo XXI, cómo se pretende suponer que los venezolanos pueden apoyar incondicionalmente lo que desconocen).

Así, entre otros, se nos propuso un cambio profundo de la aún novísima Constitución de 1999 para declararnos socialistas mediante este procedimiento. Para ello se sugiere la reforma constitucional, pero ésta se percibe a todas luces indebida porque la reforma es una vía de cambio constitucional que se prevé sólo para cambios de forma y no de fondo y, los documentos que se han filtrado de un extrañamente secretísimo proceso de discusión de un grupo súper reducido de asesores, muestra la intención de cambiar radicalmente el modelo de país que la Constitución de 1999 representa. Uno de los miembros del secretísimo Comité, el Doctor Carlos Escarrá, lo ha confesado impudicamente, «...el Presidente propondrá una Constitución Socialista...» (*El Nacional*, Foro, lunes 16-07-2007, p. A-7). Algunas evidencias de esa intención tiene que ver con una convocatoria acelerada para constituir un nuevo partido político (después de los aparentemente insatisfactorios MBR-2000, círculos bolivarianos, MVR, Polo Patriótico y demás intentos), el partido Socialista único o unificado. Pero, de los cuatro partidos más importantes de la alianza oficialista, el MVR, el PPT, Podemos y el PCV, sólo el primero aceptó la «invitación» proferida bajo la amenaza clara de que quien no acepte asociarse sería excluido del gobierno sin contemplaciones. Los líderes de los tres partidos renuentes (que incluyen, diputados, gobernadores y alcaldes, entre otros, oficialistas todos) han sido maltratados de manera severa y desconsiderada.

Evidencias del mar de fondo que supone la discusión y, sobre todo, la interpretación de lo que podemos entender o no por socialismo del siglo XXI, lo constituye el discurso de despedida del General en Jefe, Raúl Baduel, cuando pasó a retiro como Ministro de la Defensa, en que puntualiza con claridad su distancias con el modelo soviético y reivindica el carácter democrático que debe tener (<http://www.analitica.com/>). O la discusión con otro General, Muller Rojas, a propósito de su desencuentro con la política militar del régimen (*El Nacional*, 9-07-2007, p. A3).

Como evidencia de su endurecimiento y radicalización, desde enero se avisó la intención de no renovar, a partir del mes de mayo, la licencia como canal de señal abierta de Radio Caracas Televisión, decano de los canales de televisión del país, amenaza que se cumplió, poniendo en evidencia el control total que se tiene de todos los poderes públicos, perfectamente alineados con la voluntad del Ejecutivo, o lo que es lo mismo, con la voluntad del Presidente. El retiro del aire como canal de señal abierta de RCTV, terminó provocando para el Gobierno un evidente deterioro de su sistema de relaciones internacionales, al ganarse una inusitada condena mundial, especialmente europea y latinoamericana, por cerrar a RCTV sin permitirle un procedimiento judicial o administrativo de defensa de los derechos adquiridos por más de 50 años y, en el frente interno, la inesperada reaparición de un actor social que había brillado por su ausencia al menos durante la última década: los estudiantes.

Lo cierto es que el gobierno luce, seis meses después de su rotundo éxito electoral de diciembre de 2006, innecesariamente agresivo y claramente a la defensiva, aunque parece que la única estrategia de defensa que conoce la mentalidad militar es el ataque. Insultos a diestra y siniestra, a la Iglesia, incluidos jerarcas eclesiales extranjeros, insultos a los estudiantes, insultos al senado brasileño, al chileno, al gobierno español, al embajador saliente de Japón, a los gobernadores oficialistas de Podemos, a los extranjeros que «vengan a mancillar el suelo patrio» con amenaza de expulsión incluida. Insultos automáticos y claros a todos los que no compartan su perspectiva siempre para declararlos loros, lacayos o ecos del imperialismo norteamericano.

La propia entrada al MERCOSUR se ha puesto en juego, el alejamiento con España, el endurecimiento de los «mass media» internacionales que hasta hace poco le eran al menos cordiales. En el frente interno, las protestas con sordina evidenciadas en la «exitosa» Copa América celebrada entre junio y julio, muestra que las cosas no están saliendo con la facilidad que se suponía.

Ingenuamente provoca preguntar que si la transformación de la Constitución de 1961 en la de 1999 requirió de un proceso constituyente

inclusivo, ¿a qué se le teme ahora y por qué intentar colar el socialismo del siglo XXI como el contrabando de una reforma a todas luces insuficiente como mecanismo y además inconveniente por engañosa?

Lo único claro es que nada está claro. Si el Gobierno pretende imponer el socialismo del siglo XXI por medio de un golpe de estado de facto y no con un proceso de discusión participativo e incluyente que permita dilucidar sin prisas, sin imposiciones el modelo de país que aspira la mayoría, de nuevo se oscurecerán las perspectivas de la Nación. Lo que está en discusión es el futuro de nuestros hijos y con eso no se juega, nadie va a aceptar que se imponga un modelo que no satisfaga las legítimas aspiraciones de la mayoría, y sobre el modelo de país lo que se impone son los acuerdos y nunca las imposiciones.

¿Será mucho pedir calma y cordura, como nos proponía Eleazar López Contreras en 1936?

Oscar Aguilera